

FILIPINAS

Wendy Alejandra Medina de Loera
*York University*¹

El objetivo del presente escrito es ofrecer al lector un breve recuento de los que considero son algunos de los acontecimientos más relevantes ocurridos en las Filipinas entre 2017 y 2018. Al escribir un recuento de este tipo, muchos sucesos de distinta índole se resaltan, mientras otros se omiten. El proceso de selección es subjetivo, por ello debo señalar que mi decisión de incluir ciertos temas estuvo influenciada por mis intereses de investigación y mi intención de ofrecer un panorama lo más amplio posible de lo ocurrido en Filipinas en 2018, que comprenda procesos sociales, políticos, económicos y ambientales. Mi acercamiento a las Filipinas está definido por el tipo de relación que he establecido con este país; incluso he llegado a conocer algunos de sus procesos sociopolíticos y económicos gracias a mis estudios de maestría sobre el sureste de Asia, a mis búsquedas personales y a charlas con colegas y amigos filipinos que viven en el extranjero.

Si bien el artículo no compartimenta ni distingue entre los elementos constitutivos de nuestras complejas realidades como seres sociales, su punto de entrada son las continuidades y transformaciones de los procesos políticos a escala nacional durante el periodo de septiembre de 2017 a septiembre de 2018, pues éstos repercuten en la vida cotidiana. La intención de presentar el texto sin secciones es enfatizar que lo político, lo social, lo cultural, lo económico y lo medio ambiental son componentes de nuestra realidad que están interconectados e interactúan. Sin embargo, el riesgo de presentar un reporte anual de las Filipinas de esta manera y en este momento (septiembre de 2018) es que podría parecer que se resalta (en exceso quizá) el papel de un personaje controversial y su forma de hacer política.

¹ Esta investigación se nutrió de la colaboración de Fernando Calderón Valenzuela y Kenneth Cárdenas. A Fercho le agradezco las ideas que compartió conmigo, así como sus comentarios y sugerencias sobre el contenido de este artículo, y a Kenneth, sus recomendaciones en cuanto a las fuentes de información a utilizar para su elaboración y los temas a incluir.

Me refiero al actual presidente de las Filipinas, Rodrigo Roa Duterte. No es mi intención darle más importancia de la que merece, ni contribuir a banalizar más el debate político, de por sí ya banalizado debido a sus opiniones y prácticas. Sin embargo, en estos momentos él es el referente de los procesos políticos de las Filipinas dentro y fuera del país. Duterte ha logrado atraer la atención pública sobre él, y parecería que el gobierno filipino funciona sometido a su voluntad, pero es relevante preguntarnos hasta qué punto los medios de comunicación nacionales e internacionales contribuyen a generar la imagen de que el presidente ostenta más poder del que en realidad tiene.

Son dos los hilos conductores del artículo: la desigualdad y la violencia en la que vive la sociedad filipina. Por un lado, la desigualdad no sólo se refleja en disparidades socioeconómicas, sino también en los efectos diferenciados de la lucha contra las drogas y los llamados “desastres naturales”, así como en las oportunidades diferenciadas para acceder a la justicia (y hasta las oportunidades desiguales para salir beneficiado en la administración de justicia). Por otro lado, la violencia se manifiesta de maneras muy evidentes y escandalosas, como asesinatos y muertes, pero también de otras formas menos visibles, más silenciosas y sistemáticas como las duras condiciones socioeconómicas de algunos estratos sociales. Elegí enfatizar el tema de la violencia, por la cobertura tan amplia y reiterativa que se le ha dado en medios de comunicación masiva, filipinos e internacionales.

Finalmente, dos notas aclaratorias. Primera, en cuanto a las citas textuales incluidas en el artículo, es probable que en el proceso de traducción del inglés al español se haya perdido el carácter “textual” de las citas, pero he respetado la idea central. Hice mi mejor esfuerzo para presentar la traducción más adecuada, y asumo total responsabilidad por los errores que pueda haber cometido. Segundo, respecto al uso que hago de varias encuestas realizadas por la agencia filipina Social Weather Stations, elegí esta fuente de información para tener una mejor idea de la percepción que la misma sociedad filipina tiene sobre varios procesos sociales, políticos y económicos del país. Sin embargo, debo advertir al lector que en realidad no conozco lo neutral y/u objetiva que es esta agencia, tanto en el diseño de sus encuestas como en su realización. Ignoro también el tipo de relación que Social Weather Stations tiene con el gobierno y con otros grupos de interés.

¿QUÉ HA PASADO EN LAS FILIPINAS DESDE LOS ÚLTIMOS MESES DE 2017?

Lo ocurrido en las Filipinas de septiembre de 2017 a septiembre de 2018 refleja el clima de violencia que ha caracterizado a este país desde que comenzó la administración del presidente Rodrigo Duterte, en junio de 2016. La situación tan violenta que experimentan y enfrentan a diario los filipinos no sólo se expresa en muertes y asesinatos de quienes la policía asocia con el tráfico y consumo de drogas en el marco de la lucha antidrogas, también se percibe en muertes y arrestos de quienes son identificados por el gobierno como sus opositores, a los que considera como una posible amenaza al *statu quo*. “La lucha contra las drogas” que Duterte puso en marcha el 1 de julio de 2016 ha cobrado, hasta septiembre de 2017, aproximadamente 12 000 vidas, en especial de *urbanitas* pobres o de escasos recursos, incluyendo niños (Amnesty International, 2017: 40-45; Human Rights Watch, 2017: 429). Según el Informe de Human Rights Watch 2018, el total de víctimas resulta de la sumatoria de 3 906 muertes declaradas por la Agencia Filipina de Control de Drogas (Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, por sus siglas en inglés), y el resto, ocasionadas por sujetos armados no identificados (*Ibid.*: 429).² En realidad, existe incertidumbre acerca de la cifra precisa de muertes, pero organizaciones defensoras de derechos humanos señalan el número indicado arriba como una cercana aproximación.

En relación con el elevado número de muertes producto de la “lucha antidrogas”, la Corte Penal Internacional recibió en abril de 2017 la demanda de un abogado filipino contra Duterte. En su demanda, Jude Sabio acusaba a Duterte y a otros 11 oficiales filipinos de masacres y crímenes de lesa humanidad que no se limitan únicamente a la administración de Duterte como presidente de las Filipinas, sino que datan de su periodo como alcalde de Davao, en Mindadano, en 1988 (Holmes, 2017). El organismo internacional inició en febrero de 2018 un análisis preliminar para investigar la campaña antidrogas de Duterte y determinar si se han cometido crímenes de lesa humanidad y, en tal caso, si la corte tendría jurisdicción (Corte Penal Internacional, 2018a; Petty, 2018).

En respuesta a estos intentos de la Corte Penal Internacional, en marzo de 2018 Duterte anunció la inmediata retirada de las Filipinas de este organismo (Dela Cruz y Sterling, 2018;

² El senador Antonio Trillanes, fuerte crítico de Duterte, ha sugerido que el número estimado de muertes producto de la “lucha contra las drogas” asciende a más de 20 000 (Regencia, 2018a).

“Full text”, 2018a). La salida de las Filipinas se hará efectiva a principios de 2019, después de un año de su notificación a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Sin embargo, la salida de un Estado de esta Corte no afecta los procesos ya en curso ni otros asuntos que la Corte haya comenzado a evaluar previo a la fecha en la cual se hace efectiva la salida del Estado parte (Corte Penal Internacional, 2018b). En otras palabras, “la Corte retiene su jurisdicción sobre crímenes cometidos durante el tiempo en que el Estado es parte del Estatuto y puede ejercer esta jurisdicción sobre estos crímenes, incluso después de que la salida del organismo se haga efectiva” (Corte Penal Internacional, 2018b: 2).

En este contexto, activistas y familiares de víctimas de la “lucha contra las drogas” denunciaron a Duterte ante la Corte Penal Internacional en agosto de 2018, acusándolo de ser responsable de miles de ejecuciones extrajudiciales (“Philippine President Rodrigo”, 2018). Esta segunda denuncia podría resultar esperanzadora para que en algún momento Duterte sea juzgado por la Corte, a pesar de su decisión y notificación de la salida de las Filipinas de este organismo. Además, la investigación preliminar iniciada por la Corte tiene el potencial de verse fortalecida por la reciente aceptación pública de Duterte de su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales. Hasta antes de septiembre de 2018 la policía y Duterte habían sostenido que los asesinatos cometidos por el aparato policial en contra de presuntos traficantes y usuarios de drogas ocurrieron durante operaciones antidrogas legítimas, las cuales están sustentadas en la política oficial de la lucha contra las drogas. En efecto, en septiembre de 2018 el presidente Duterte finalmente admitió públicamente que “[su] único pecado [han sido] las ejecuciones extrajudiciales”, confesando así el carácter homicida que distingue a su política antidrogas (Ellis-Petersen, 2018b: 2; “Rodrigo Duterte”, 2018: 2).

Llama la atención que a pesar de la alarmante cifra de pérdida de vidas humanas que sigue en escalada, del número creciente de críticas a escala internacional respecto a la violencia desatada, y de la sistemática violación de derechos humanos en el país, la “lucha antidrogas” continúa siendo evaluada como satisfactoria por una parte de la sociedad filipina. Una encuesta realizada en junio de 2018 por la agencia filipina Social Weather Stations a 1 200 adultos a escala nacional indica que 78% de los entrevistados están satisfechos con la campaña antidrogas, y sólo el 13% están insatisfechos (2018a). Según la terminología utilizada por la agencia filipina, la satisfacción neta de estos resultados fue clasificada como

“muy buena”, siéndole esta categoría la segunda mejor opción después de “excelente” (Social Weather Stations, 2018a).

Aunque este grado de percepción popular en la “lucha contra las drogas” resulta sorprendente y a la vez desconcertante, no necesariamente indica que la sociedad filipina esté a favor de los métodos a los que se recurren en la campaña antidrogas. Para explicar esto, otra de las encuestas realizadas por Social Weather Stations en junio de 2018 a 1 200 adultos filipinos resulta ilustrativa. Los resultados de la encuesta indican que 75% de los entrevistados considera “muy importante” que la policía capture vivos a los sospechosos de tráfico y uso de drogas ilegales, y 21% lo considera “relativamente importante”. Aun así, 4% de los encuestados no lo considera importante (Social Weather Stations, 2018c); esto podría dejar entrever un alto porcentaje de desacuerdo popular con los asesinatos. Es muy posible también que el alto porcentaje de satisfacción en la “lucha contra las drogas” esté más relacionado con el objetivo de tal política que con la forma en que la policía ha operado. De igual manera, otra encuesta realizada por la misma institución en junio de 2018 a 1 200 filipinos adultos ayuda a explicar mejor la cuestión. La encuesta indica que 60% de los entrevistados coincide en que el arresto de “vagabundos” por parte de la policía es una violación a los derechos humanos (Social Weather Stations, 2018b).³ Estos resultados ayudan a clarificar la posición de algunos miembros de la sociedad filipina en cuanto a la arbitrariedad de los arrestos y su desaprobación a la violación de derechos humanos de la que son objeto los “vagabundos”.

Otros indicadores de una de las encuestas aquí mencionadas (Social Weather Stations, 2018c) nos invitan a pensar también que a pesar del desacuerdo popular con algunos elementos del *modus operandi* de la policía filipina y con el aumento en el número de víctimas a manos de ésta, la confianza en el aparato policial persiste. Los resultados de esta encuesta indican que de 1 200 adultos entrevistados, 58% considera que es “muy importante” para la policía capturar vivos a los sospechosos, 28% considera que es “relativamente importante”, 11% cree que “no es muy importante”, y 3% piensa que “no es importante” (Social Weather Stations, 2018c). Estos datos indican que un alto porcentaje de los filipinos encuestados percibe que las vidas que se han cobrado en la “lucha antidrogas” se deben a que

³ Utilizo el sustantivo “vagabundo” como traducción de *idlers*, término utilizado en la encuesta mencionada para referir a individuos que andan merodeando por las calles sin otro propósito que pasar el tiempo. El sustantivo *idlers* tiene en sí una connotación de flojo.

la policía no tuvo otra opción en el momento del arresto o el enfrentamiento con sospechosos, y deja fuera del panorama la posibilidad de las ejecuciones extrajudiciales que han sido una de las principales acusaciones contra la campaña puesta en marcha por Duterte y que el aparato policial hace posible.

Un tema recurrente entre los críticos de la “lucha contra las drogas” ha sido su carácter clasista, en el sentido de que el blanco principal es la población de escasos recursos, sobre todo en áreas urbanas. Reportes y acusaciones de organizaciones defensoras de derechos humanos en los ámbitos nacional e internacional han subrayado tal característica (Amnistía Internacional, 2017; Human Rights Watch, 2017; Karapatan, 2018). Esto puede ser medianamente respaldado por los resultados que una encuesta realizada por Social Weather Stations en junio de 2018 arrojó respecto a la relación entre arrestos de “vagabundos” y clase. A la pregunta sobre quién sería usualmente arrestado por andar merodeando en las calles y vagar, 58% de los 1 200 encuestados respondieron que la policía “no elige a quién arrestar basándose en la clase a la que se asocia a los individuos”, mientras que 40% opinó que “únicamente los pobres” serían arrestados, y 2% contestó que “únicamente los ricos” serían arrestados (Social Weather Stations, 2018b). Aunque la percepción de la mayoría de los entrevistados es que la clase a la que son asociados los “vagabundos” no se relaciona con quien es arrestado por la policía, un importante porcentaje detecta que sólo son arrestados aquellos a quienes se les asocia con los sectores de escasos recursos y/o socioeconómicamente marginados.

Las anteriores observaciones de los encuestados, junto con lo que organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado y documentado, nos invitan a considerar que la “lucha contra las drogas” en las Filipinas ha afectado de manera desigual a la población, en términos tanto de clase como espaciales. En otras palabras, la campaña antidrogas crea efectos desiguales en sus víctimas de diversas clases, ya que familias de escasos recursos se enfrentan, por ejemplo, a una situación complicada con el daño o muerte infligidos a alguno de sus miembros. Pensemos en los gastos hospitalarios y/o funerarios en los que se incurre, y la desestabilización económica (además de emocional) que puede generarse si la víctima proveía a su familia, entre otras posibilidades (Amnesty International, 2017). La campaña antidrogas permite ver cómo lo social, lo económico y lo político no son ámbitos independientes. “La lucha contra las drogas” afecta las interacciones sociales presentes y

futuras en tanto que facilita el desmoronamiento de la confianza entre sectores de la sociedad, la desintegración de familias, la generación de trauma y la producción de rencores.

Paradójicamente, la percepción de la sociedad filipina respecto a la democracia en su país es de satisfacción. Según sus propias concepciones de “democracia”, ésta no está reñida con la violencia ocasionada por la lucha antidrogas. La encuesta realizada por Social Weather Stations a 1 500 adultos durante septiembre de 2018 indica al respecto que 84% de los entrevistados “está satisfecho con la manera en que funciona la democracia en el país” (Social Weather Stations, 2018e). Y aunque la mayoría de los encuestados, 59%, prefiere la democracia a cualquier otro tipo de gobierno, parece que se está pasando por alto lo poco democrático que es el Estado filipino. Por ejemplo, la decisión tomada y notificada por Duterte sobre la salida de las Filipinas de la Corte Penal Internacional parece haber infringido las funciones del senado para aprobar o rechazar tal decisión (Merez, 2018). De igual manera, la administración actual ha mostrado su carácter antidemocrático mediante la desigualdad de oportunidades provista a presuntos traficantes y consumidores de droga para acceder al debido proceso de justicia. En este sentido, miles han sido privados de esta oportunidad al ser asesinados en enfrentamientos con policías, mientras otros que cuentan además con recursos económicos y acceso a redes influyentes, como Peter Lim, son absueltos por el sistema de justicia por falta de evidencia, lo que resalta el contraste entre estos “sospechosos de élite” y los “culpables de la calle” (Aldama, 2018; “DOJ Clears Cebu Businessman”, 2018; “Kerwin Espinosa”, 2018).⁴

El carácter poco democrático o antidemocrático del gobierno filipino también se evidencia en la opresión y/o supresión del desacuerdo y la oposición mediante acusaciones, arrestos y asesinatos. En este contexto, entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018 la violencia política en las Filipinas se extendió también a figuras de la oposición dentro de instituciones del Estado. La situación es mejor ilustrada con el caso del senador Antonio Trillanes.⁵ Trillanes “fue arrestado por cargos de sublevación [en septiembre de 2018], horas después de que una corte emitiera una orden para su captura” (“Philippines: Senator Critical

⁴ En agosto de 2018, después de la decisión tan controversial que absolvió a Lim de las acusaciones en su contra, se presentaron nuevos cargos contra él (Buan, 2018).

⁵ En febrero de 2017, la senadora Leila de Lima, importante crítica de Duterte, fue arrestada. A la senadora se le acusó de haber recibido dinero de parte de narcotraficantes en prisión, el cual se dice fue utilizado para su campaña al Senado. Además, se le acusó de haber recibido apoyo financiero a cambio de otorgar privilegios especiales a los capos de la droga.

of Duterte”, 2018: 2). El senador Trillanes ha sido crítico de la “guerra contra las drogas” de Duterte (Regencia, 2018a); prueba de ello es que él, junto con otro congresista (Gary Alejano), apoyaron la demanda puesta ante la Corte Penal Internacional por un particular filipino en 2017, en la que se solicita de manera urgente a la Corte iniciar una investigación preliminar contra Duterte, enfatizando todas sus declaraciones públicas en las que ha expresado la necesidad de asesinar sospechosos de tráfico y consumo de drogas ilegales, así como de “tirar a matar” para terminar con el problema de las drogas en el país (Gavilan, 2018a; “Philippines: Senator Critical of Duterte”, 2018; Petty, 2018). En general, a poco más de dos años de que comenzó la administración de Duterte, un patrón de violencia contra la oposición política es evidente, aunque encubierto con un discurso antidrogas.

De igual manera, la violencia política en las Filipinas en este periodo se reflejó en asesinato de varias figuras políticas en el plano local, en distintos puntos del país. Con base en un registro y conteo elaborados por el periódico filipino *Rappler*, desde que comenzó el gobierno nacional actual han sido asesinados 11 alcaldes y 6 vicealcaldes (Gavilan, 2018b); de ellos, 4 vicealcaldes y 4 alcaldes en el último año. Algunos fueron incluidos por Duterte en una lista que vinculaba con el narcotráfico a miembros de la policía, de gobiernos locales y del poder judicial (“The Duterte List”, 2016; Villamor, 2016; Villamor y Paddock, 2016; “Philippine Mayor Antonio Halili”, 2018; “Assasination of Second Philippine Town Mayor”, 2018). Algunos otros no aparecían en esa lista, por lo que no quedan claros los motivos de sus homicidios.

La violencia política en las Filipinas y los ataques a la oposición también ocurrieron en otro frente: organizaciones y activistas defensores de derechos humanos, entre otros. Según Human Rights Watch, “el presidente Rodrigo Duterte ha sumergido a las Filipinas en su peor crisis de derechos humanos desde la crisis vivida durante la dictadura de Marcos en las décadas de 1970 y 1980” (2017: 429). En el contexto de la “lucha contra las drogas”, no sólo se han violado los derechos humanos de las víctimas de arrestos, torturas y asesinatos, sino que también los defensores de derechos humanos han sido blanco de la violencia del Estado. Duterte ha expresado públicamente lo “molesto” pero “descartable” que le resultan los defensores de derechos humanos, y en 2018 los vinculó con el Partido Comunista y su ala militar (Nuevo Ejército del Pueblo). Ambas organizaciones comunistas fueron declaradas como grupos terroristas en diciembre de 2017, después de que Duterte firmara la “Proclamación núm. 360” para poner fin a las negociaciones de paz con el Frente

Democrático Nacional (Ranada, 2017; Ballaran, 2017; Mallari y Lim, 2018; Romero, 2018; Roughnee y Smith, 2018; Torres-Tupas, 2018).

En febrero de 2018, como parte de la petición entregada a una corte regional en Manila para declarar oficialmente al Partido Comunista y al Nuevo Ejército del Pueblo como grupos terroristas, se adjuntó una lista que incluía 657 nombres de personas presuntamente miembros de estas organizaciones (Karapatan, 2018: 3). En la lista se incluyeron nombres de activistas y defensores de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas (Conde, 2018; Mogato, 2018). La persecución y asesinato de individuos asociados con el Partido Comunista y su ala armada tienen una larga historia en las Filipinas; por tal motivo, resulta todavía más preocupante la inclusión de nombres de individuos que expresan sus críticas al gobierno nacional en listas que los identifica como el frente legal del Partido Comunista y el Nuevo Ejército del Pueblo (Mallari y Lim, 2018). Su inclusión en una lista de este tipo puede significar, como ha ocurrido con otros enlistados, la implícita aprobación y legitimación de sus asesinatos, sobre todo por el clima de impunidad que impera en las Filipinas

El panorama de violencia política generalizada también se manifestó en el asesinato de tres sacerdotes, y de un cuarto que sobrevivió al intento de homicidio. En diciembre de 2017, el padre Marcelito “Tito” Paez fue asesinado en Nueva Ecija horas después de haber facilitado la liberación de un líder campesino que era preso político (Ayroso, 2017a; Regencia, 2018b: 10). El padre Paez “había estado al frente de las campañas contra la militarización en Nueva Ecija y Luzon Central, y era conocido por liderar servicios de la iglesia para comunidades y víctimas de violaciones de derechos humanos” (Ayroso, 2017b: 5). En abril de 2018, el padre Mark Ventura, reconocido por sus actividades de abogacía en defensa de los pueblos indígenas y en contra de la minería en Cagayan, fue también asesinado (Olea, 2018a: 5; Regencia, 2018b: 10). Finalmente, el padre Richmond Nilo fue asesinado en junio de 2018 en Nueva Ecija (Olea, 2018b). Hay menos claridad en cuanto a los motivos de este último asesinato, ya que entre las razones provistas por la policía están: “una disputa sobre tierras con familiares, un caso de violación de un exseminarista, y sus críticas a la Iglesia y a Cristo” (Talabong, 2018: 11).

Aunque en el contexto de la “lucha contra las drogas” se le ha dado mayor visibilidad a víctimas de comunidades marginadas en áreas urbanas, las prácticas violentas del Estado filipino también se extienden a poblaciones rurales, sobre todo contra quienes participan

activamente en la defensa de derechos del campesinado y abogan por el acceso a la tierra. La violencia cometida contra campesinos no es exclusiva del gobierno nacional vigente, pues sus predecesores también hicieron uso de la violencia para callar voces inconformes y propagar temor entre disidentes potenciales. Sin embargo, el gobierno actual optó por dar continuidad a estas prácticas violentas e incluso reforzarlas (“With 91 Peasants Slain in 14 Months”, 2017). De acuerdo con una organización filipina defensora de derechos humanos, *Karapatan*, 123 campesinos han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales y 2 de desaparición forzada de julio de 2016 a marzo de 2018 (2018: 14).

Otra forma como se instituyó la violencia en las Filipinas fue la ley marcial en Mindanao. La proclamación de esta ley en mayo de 2017 ocurrió en el contexto del surgimiento de un grupo armado autoidentificado como Dawlah Islamiya, que expresó su alianza con el Estado Islámico y tomó la ciudad de Marawi (*Karapatan et al.*, 2018). Esta ley tenía vigencia hasta diciembre de 2017; en aquel momento el congreso aprobó la petición de Duterte para extenderla en toda la isla por un año más, es decir hasta finales de 2018 (“Congress Extends Martial Law”, 2018). Considerando que la Batalla de Marawi fue declarada oficialmente concluida en octubre de 2017, vale la pena cuestionar las intenciones y justificaciones de Duterte al solicitar su extensión (Ng y Mogato, 2017; Wakefield, 2017).

Duterte mencionó ante el congreso la necesidad de extender la ley marcial para erradicar a los grupos inspirados por el Estado Islámico (“Congress Extends Martial Law”, 2018), pero una posibilidad es que, del mismo modo que la “lucha contra las drogas” ha servido para cubrir y justificar depuraciones de la oposición política y críticos del gobierno, “la ley marcial [en Mindanao] sirva para facilitar las operaciones contrainsurgentes contra el Partido Comunista de Filipinas, su ala armada y los presuntos seguidores de estos grupos catalogados al día de hoy como ‘terroristas’” (*Karapatan et al.*, 2018: 6). Varias organizaciones filipinas defensoras de los derechos humanos han identificado la relación entre el marco provisto por la ley marcial en Mindanao y una escalada de casos de varios tipos de violencia contra individuos pertenecientes a organizaciones de campesinos y grupos indígenas (*Karapatan et al.*, 2018; “Institutionalized Torture”, 2018; “Massacre of Lumad”, 2018).

Por lo anterior, y porque los residentes de Marawi que sobrevivieron al conflicto y fueron desplazados siguen enfrentando un cúmulo de situaciones adversas, la crisis del área

no puede ser considerada como concluida. Aproximadamente 360 000 filipinos o 42 000 familias fueron desplazados de Marawi desde mayo de 2017 y siguen sin poder regresar (Gonzales, 2018). Además, aunque se declaró oficialmente concluido el enfrentamiento armado en Marawi en octubre de 2017, el secretario de Defensa, Delfin Lorenzana, expresó que “seis batallones se quedarían en el sitio ya que, a pesar de haber ganado la batalla, la ideología radical del enemigo no había sido completamente aniquilada” (Ng y Mogato, 2017: 19). La ambigüedad en la finalización de la crisis es evidente y se refuerza con acciones que reflejan la continua presencia de las fuerzas armadas en la ciudad de Marawi (Taguba Yecyec, 2018; Trige Andersen, 2018).

Ante este panorama, violento y complicado, y a pesar de los altos niveles de satisfacción de parte de la sociedad filipina con el desempeño general del gobierno nacional actual, las protestas y demostraciones contra el gobierno no estuvieron ausentes en este periodo.⁶ Los ejemplos de dos marchas masivas sobresalen. En septiembre de 2017, miles de filipinos se congregaron con motivo de la gran marcha anual con la que se condena la brutal y opresiva dictadura de Ferdinand Marcos; las demostraciones tuvieron lugar en varias partes del país (“Thousands Join National Protest”, 2017). Todo tipo de manifestantes se unieron a la demostración, sobre todo estudiantes. La ocasión fue utilizada para enviar a Duterte el mensaje de que no se le permitirá revivir lo sufrido con Marcos (Mogato y Ng, 2017). Las señales de dicha posibilidad no sólo provienen de la manera como está operando el gobierno, sino también de la simpatía y hasta del respeto que Duterte ha expresado por Ferdinand Marcos, así como sus nexos personales con la familia de éste (Placido, 2016; Morallo, 2017). La otra gran manifestación se llevó a cabo en julio de 2018, el día que Duterte dio su informe de gobierno. En dicha protesta se hizo evidente, a pequeña escala, la polarización de la sociedad filipina, con aproximadamente la mitad de los presentes apoyando a Duterte y la otra mitad en su contra (“In Photos”, 2018).

La violencia en su forma sistemática también fue evidente en las Filipinas este año, y se ha visto reflejada no sólo en la persistencia de la desigualdad económica, sino también en

⁶ Una encuesta realizada por Social Weather Stations en septiembre de 2018 a 1 200 participantes indica que el desempeño general de la administración Duterte fue evaluado como “muy bueno”, según la terminología utilizada por la agencia (2018f). Comparado con el grado de satisfacción con el desempeño general de la administración evaluado en diciembre de 2017, éste disminuyó, ya que en aquel momento fue calificado como “excelente” (Social Weather Stations, 2018d).

el endurecimiento de las condiciones económicas para los sectores de escasos recursos. Indicadores macroeconómicos como el PIB muestran un escenario medianamente estable en la economía filipina. Según el Banco Asiático de Desarrollo (2018), el PIB pasó de una tasa de crecimiento anual de 6.9% en 2016, a 6.7% en 2017. De igual manera, de enero a marzo de 2018 el PIB se redujo ligeramente, a una tasa de 6.6%, y descendió de manera más pronunciada durante el segundo cuatrimestre de 2018, a una tasa de 6% (Rivas, 2018a; Rivas, 2018b). Indicadores como el PIB per cápita refuerzan también el escenario de una economía estable. El PIB per cápita mostró un ligero aumento: de 2 950.914 dólares en 2016, a 2 988.953 dólares en 2017 (Banco Mundial, s.f.).

No obstante, este panorama en general positivo se complica al considerar que el crecimiento económico a escala nacional no se traduce en una mejora de las condiciones de vida de todos por igual en la sociedad filipina. Según la oficina nacional de estadística, Philippines Statistics Authority, de un número estimado de 24.4 millones de familias filipinas en julio de 2017, 7.3 millones (30%) fueron identificadas como pertenecientes al grupo con ingresos promedio más bajos (2018: 7). Estas familias tuvieron un ingreso promedio de 60 000 pesos filipinos de enero a junio de 2017 (aproximadamente 1 115 dólares o 6 dólares al día), mientras que para las restantes 17.1 millones de familias su ingreso promedio fue de 173 000 pesos filipinos durante el mismo periodo (aproximadamente 3 216 dólares o cerca de 18 dólares al día) (Philippine Statistics Authority, 2018: 26). Estos números resultan útiles para evidenciar la contrastante desigualdad que existe, pero tienen graves limitaciones para explicarla al interior de la amplia categoría que corresponde a los 17.1 millones de familias, pues entre ellas no se hace ninguna diferencia. Por ello, no se conoce la cantidad de familias que perciben entre 6 y 18 dólares al día. Además, esta información resulta tendenciosa porque infla los ingresos por salarios y negocios personales al anexar los ingresos obtenidos mediante apoyos económicos, regalos, rentas, pensiones, etc. Estos datos encubren la persistente pobreza en el país; por lo tanto, queda preguntarse cuántas de las 24.4 millones de familias en realidad caen dentro de la categoría de familias que están por debajo del umbral de pobreza, el cual es de 3.20 dólares por día para países de ingreso mediano bajo, como las Filipinas.

Indicadores como el coeficiente de Gini también nos alertan acerca de la perseverante desigualdad en la distribución de los ingresos en Filipinas. Este coeficiente oscila entre 0 y 1, donde 0 corresponde a una perfecta igualdad y 1 equivale a una perfecta desigualdad. En

2015 el coeficiente de Gini para las Filipinas fue de 0.4439, en 2016 ascendió a 0.834, y en 2017 siguió subiendo hasta llegar a 0.839 (Cigaral, 2017; Philippine Statistics Authority, 2017: xxiii).

La imagen de una economía nacional relativamente estable también se hace trizas al tener en cuenta la reciente inflación que claramente no afecta a todos por igual. El índice de precios al consumidor se incrementó de 2.6% en agosto de 2017 a 6.4% en agosto de 2018 (Chua *et al.*, 2018: 1). La inflación tiene efectos diferenciados para los distintos estratos sociales. En este contexto, el alza en los precios de los alimentos puede afectar más la economía de los 7.3 millones de familias (30%) identificadas como el grupo con ingresos promedio más bajos. Esto no sólo se explica por el bajo nivel de sus ingresos, comparado con el nivel de ingresos de las otras 17.1 millones de familias, sino también porque destinan mayor parte de sus ingresos a la compra de alimentos, los cuales se han encarecido (durante el primer semestre de 2017 los 7.3 millones de familias con ingresos promedio más bajos destinaron 59.4% de sus ingresos a la compra de comida, mientras que el resto de familias destinaron 37.6% de sus ingresos) (Philippines Statistics Authority, 2018: 27).

Finalmente, los “desastres naturales” también estuvieron presentes en las Filipinas durante este periodo. En orden cronológico, la tormenta tropical Kai-Tak (cuyo nombre local es Urduja) provocó severas inundaciones a mediados de diciembre de 2017, pues la cantidad promedio de dos meses de lluvia cayó sólo en 48 horas (OCHA, s.f.a: 2). La tormenta entró por la provincia de Samar Oriental y afectó a un estimado de 797 300 personas (OCHA, 2018a). También en diciembre de 2017, otra tormenta tropical, Tembin (cuyo nombre local es Vinta), entró por Davao Oriental ocasionando aludes de lodo e inundaciones, y dejando más de 200 muertos y 70 000 desplazados a su paso (Busby y Agencies, 2017; OCHA, s.f.b: 2). Finalmente, a mediados de septiembre de 2018 el tifón Mangkhut (también conocido como Ompong) arrasó las Filipinas. Hasta ahora se ha evaluado que el tifón afectó a aproximadamente tres millones de personas y desplazó a más de 14 000, además de que ocasionó más de 70 muertes, más de 130 heridos, y severos daños y pérdidas materiales (Ellis-Petersen, 2018a; OCHA, s.f.c: 12). En este contexto, es relevante considerar que entre los distintos sectores de la sociedad hay grados diferenciados de exposición al riesgo y de vulnerabilidad a estos eventos. Es por estas desigualdades que los “desastres naturales” impactan distinto a diferentes estratos sociales, por muy “naturales” que se planteen las secuelas de estos fenómenos. Así ocurrió en Filipinas con el tifón Mangkhut, por ejemplo, pues aproximadamente 48 000 de

las casas en áreas altamente riesgosas durante el tifón estaban construidas con materiales ligeros y eran mucho más vulnerables a los impactos de éste (OCHA, 2018b; Staff y Agencies, 2018: 4). Además, no sólo los sectores sociales bajos con recursos económicos limitados fueron los más expuestos al riesgo, sino que su situación de vulnerabilidad se vio incrementada luego de sufrir el embate de uno de estos eventos.

CONSIDERACIONES FINALES

En su informe de gobierno de julio de 2018, Duterte señaló su intención de continuar con la “lucha contra las drogas” (“Full Text”, 2018b). El panorama en este sentido se percibe desolador. La indiferencia con la que Duterte recibe críticas y recriminaciones, así como su aparente despreocupación por los mecanismos que, aunque no coercitivos, supondrían ponerle ciertas limitaciones, indican que 2019 no será muy distinto de lo que ha sido 2018 en términos de violencia en el país. La situación ha significado un deterioro en las relaciones de las Filipinas con ciertos organismos internacionales, como las Naciones Unidas. De algunos de los eventos ocurridos durante el periodo de septiembre de 2017 a septiembre de 2018, como la inclusión de la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas ante las Naciones Unidas en la lista de “terroristas”, puede deducirse la irrelevancia que esto tiene para Duterte. Finalmente, sus relaciones con poderosos actores internacionales se mantienen intactas.

El gobierno filipino ha enfatizado su interés por contar con una política exterior independiente, y se ha esforzado, verbalmente, para dar una imagen de su distanciamiento con Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, la cooperación militar con la administración estadounidense se ha mostrado muy consolidada en Mindanao, vía la *Operation Pacific Eagle*, “operación presentada como la continuación de la Operación Inherente Resolver, la cruzada militar estadounidense contra el Estado Islámico en Irak y Siria” (Gabriel, 2018: 2). La duración indeterminada de la *Operation Pacific Eagle* en Mindanao invita a preguntarnos sobre lo que ocurrirá en 2019 en el área, pues hasta el momento lo que se sabe es que la ley marcial en la isla expirará en diciembre de 2018. Habrá que considerar en la ecuación los diversos intereses políticos y económicos para acceder a los recursos naturales de Mindanao (Karapatan *et al.*, 2018).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aljazeera (2018), “Assassination of Second Philippine Town Mayor Caught on Camera”, *Aljazeera*, 3 de julio. Recuperado de: <https://www.aljazeera.com/news/2018/07/assassination-philippine-town-mayor-caught-camera-180703141220613.html>
- Aljazeera (2018), “Philippine Mayor Antonio Halili Assassinated During Ceremony”, *Aljazeera*, 2 de julio. Recuperado de: <https://www.aljazeera.com/news/2018/07/philippine-mayor-antonio-halili-assassinated-ceremony-180702054409964.html>
- Aljazeera (2018), “Philippines: Senator Critical of Duterte Arrested”, *Aljazeera*, 25 de septiembre. Recuperado de: <https://www.aljazeera.com/news/2018/09/philippines-senator-critical-duterte-arrested-180925102455952.html>
- Aljazeera (2018), “Rodrigo Duterte: ‘My Only sin is Extrajudicial Killings’”, *Aljazeera*, 28 de septiembre. Recuperado de: <https://www.aljazeera.com/news/2018/09/rodrigo-duterte-sin-extrajudicial-killings-180928092641659.html>
- Aldama, Z. (2018), “How Philippines War on Drugs has Become a War on the Poor”, *South China Morning Post*, 20 de enero. Recuperado de: <https://www.scmp.com/magazines/post-magazine/long-reads/article/2129538/how-philippines-war-drugs-has-become-war-poor>
- Amnesty International (2017), “Extrajudicial Executions and Related Violations”, en Amnesty International, *If you are Poor, you are Killed. Extrajudicial Executions in the Philippines War on Drugs*, Londres. Recuperado de: https://www.amnesty.org.uk/files/2017-04/ASA3555172017ENGLISH.PDF?9_73DdFTpveG_iJgeK0U13KUVFHKSL_X
- Ayroso, D. (2017a), “Peasant Leader Killed, Another Arrested”, *Bulatlat*, 25 de marzo. Recuperado de: <http://bulatlat.com/main/2017/03/25/peasant-leader-killed-another-arrested/>

- Ayroso, D. (2017b), “Nueva Ecija Catholic Priest Killed in Gun Attack”, *Bulatlat*, 4 de diciembre. Recuperado de: <http://bulatlat.com/main/2017/12/04/nueva-ecija-catholic-priest-killed-in-gun-attack/>
- Ballaran, J. (2017), “Duterte Declares CPP, NPA as Terrorist Organizations”, *Inquirer.net*, 5 de diciembre. Recuperado de: <http://newsinfo.inquirer.net/950017/duterte-declares-cpp-npa-as-terrorist-organizations>
- Banco Asiático de Desarrollo (2018), *Basic Statistics 2018*. Recuperado de: <https://www.adb.org/publications/basic-statistics-2018>
- Banco Mundial (s.f.), *PIB per cápita (US\$ a precios actuales)*. Recuperado de: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=PH>
- Buan, L. (2018), DOJ Charges Peter Lim for Drug Trade Conspiracy”, *Rappler*, 10 de agosto. Recuperado de: <https://www.rappler.com/nation/209270-doj-charges-peter-lim-conspiracy-drug-trade>
- Busby, M. y Agencies (2017), “More than 200 Killed in Philippines Mudslides and Floods as Storm Hits”, *The Guardian*, 24 de diciembre. Recuperado de: <https://www.theguardian.com/world/2017/dec/23/dozens-killed-in-philippine-mudslides-and-floods-as-storm-hits>
- Chua, K., K. Cruz, I. Endo, R. Qian y B. Hansl (2018), *Philippines Monthly Economic Developments (September 2018) (English)*, Washington D.C., World Bank Group. Recuperado de: <http://documents.worldbank.org/curated/en/708191537196602132/Philippines-Monthly-Economic-Developments-September-2018>
- Cigaral, I. N. (2017), “Filipinos’ Wealth Declines in 2017 as Inequality Widens”, *Philstar Global*, 22 de noviembre. Recuperado de: <https://www.philstar.com/business/2017/11/22/1761419/filipinos-wealth-declines-2017-inequality-widens>
- Conde, C. H. (2018), *Philippines Terrorist Petition Virtual Hit List*, Human Rights Watch, 8 de marzo. Recuperado de: <https://www.hrw.org/news/2018/03/08/philippines-terrorist-petition-virtual-hit-list>

Corte Penal Internacional (2018a), Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Mrs Fatou Bensouda, on Opening Preliminary Examinations into the Situations in the Philippines and in Venezuela [Declaración pública], 8 de febrero. Recuperado de: <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=180208-otp-stat>

Corte Penal Internacional (2018b), “Corte Penal Internacional”, ICC Statement on the Philippines’ Notice of Withdrawal: State Participation in Rome Statute System Essential to International Rule of Law [Comunicado de prensa], 20 de marzo. Recuperado de: <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1371>

Ellis-Petersen, H. (2018a), “Philippines Villages Buried by Landslide After Typhoon Mangkhut”, *The Guardian*, 21 de septiembre. Recuperado de: <https://www.theguardian.com/world/2018/sep/21/philippines-villages-buried-by-landslide-after-typhoon-mangkhut>

Ellis-Petersen, H. (2018b), “Duterte Confesses: ‘My Only Sin is the Extrajudicial Killings’”, *The Guardian*, 28 de septiembre. Recuperado de: <https://www.theguardian.com/world/2018/sep/28/duterte-confesses-my-only-sin-is-the-extrajudicial-killings>

Gabriel, E. (2018), “Operation Pacific Eagle in the Philippines: Washington’s New Colonial War”, *Mint Press News*, 9 de febrero. Recuperado de: <https://www.mintpressnews.com/operation-pacific-eagle-in-the-philippines-washingtons-new-colonial-war/237281/>

Gavilan, J. (2018a), “Gary Alejano: Duterte Can’t Do to ICC What he Does to CHR, SC, Ombudsman”, *Rappler*, 26 de febrero. Recuperado de: <https://www.rappler.com/newsbreak/rich-media/196924-gary-alejano-magdalo-pressure-duterte-international-criminal-court>

Gavilan, J. (2018b), “Mayors, Vice Mayors Killed under Duterte Gov’t”, *Rappler*, 2 de julio. Recuperado de: <https://www.rappler.com/newsbreak/iq/206262-list-mayors-vice-mayors-killed-since-july-2016-duterte-goverment>

Gonzales, A. (2018), “A Year After Assault on Marawi City, Residents Still Unable to Return”, *UNHCR News*, 23 de mayo. Recuperado de: <http://www.unhcr.org/en->

us/news/latest/2018/5/5b0583c64/year-assault-marawi-city-residents-still-unable-return.html?query=marawi

Holmes, O. (2017), “‘Mass Murder’ Complaint Filed Against Philippines’ President Duterte at ICC”, *The Guardian*, 25 de abril. Recuperado de: <https://www.theguardian.com/world/2017/apr/25/mass-complaint-launched-against-philippines-president-duterte-at-icc>

Human Rights Watch (2017), “Philippines”, en Human Rights Watch, *World Report 2018: Events of 2017*, pp. 429-435. Recuperado de: https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/201801world_report_web.pdf

(2018), Institutionalized Torture, 21 de mayo. Recuperado de: <http://www.karapatan.org/Mindanao-under-martial-law-a-year-of-state-terror-Institutionalized-torture>

Interaksyon (2017), “With 91 Peasants Slain in 14 Months, Monthly Kill Rate Under Duterte Higher than 2 Predecessors”, *Interaksyon*, 21 de octubre. Recuperado de: <http://www.interaksyon.com/breaking-news/2017/10/21/104653/with-91-peasants-slain-in-14-months-monthly-kill-rate-under-duterte-higher-than-2-predecessors/>

Karapatan, Sandugo, Suara Bangasa Moro, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas y Bagong Alyansang Makabayan (2018), *Martial Law in Mindanao: Year One*. Recuperado de: <http://www.karapatan.org/MARTIAL+LAW+IN+MINDANAO%3A+YEAR+ONE>

Karapatan (2018), “Choke all Dissenting Voices and Strangle any Semblance of Democratic Rule”, *the Malevolent Mantra of Duterte’s Leadership. Karapatan Monitor*, enero-marzo. Recuperado de: [http://www.karapatan.org/files/Karapatan%20Monitor%202018%20Jan-Mar%20\[web\].pdf](http://www.karapatan.org/files/Karapatan%20Monitor%202018%20Jan-Mar%20[web].pdf)

Kerwin Espinosa, Peter Lim (2018), “20 Others Cleared of Drug Charges”, *ABS-CBN News*, 12 de marzo. Recuperado de: <https://news.abs-cbn.com/news/03/12/18/kerwin-espinosa-peter-lim-20-others-cleared-of-drug-charges>

- Mallari, D. T. y F. Lim (2018), “Duterte Says Left-Wing Groups are Next Targets”, *Inquirer.net*, 28 de enero. Recuperado de: <http://newsinfo.inquirer.net/964165/duterte-says-left-wing-groups-are-next-targets>
- (2018), *Massacre of Lumad in Lake Sebu, South Cotabato*, 20 de mayo. Recuperado de: <http://www.karapatan.org/Mindanao-under-martial-law-massacre-of-lumad-in-lake-sebu>
- Merez, A. (2018), “ICC Withdrawal not an Exclusive Decision of Duterte: Minority Senators”, *ABS-CBN News*, 4 de septiembre. Recuperado de: <https://news.abs-cbn.com/news/09/04/18/icc-withdrawal-not-an-exclusive-decision-of-duterte-minority-senators>
- Mogato, M. y K. Lema (2016), “Philippine Dictator Marcos Buried at Heroes’ Cemetery Amid Protests”, *Reuters*, 17 de noviembre. Recuperado de: <https://www.reuters.com/article/us-philippines-marcos-idUSKBN13D0DQ?il=0>
- Mogato, M. (2016), “Philippines’ Duterte to Allow Burial of Marcos at the Heroes’ cemetery”, *Reuters*, 23 de mayo. Recuperado de: <https://www.reuters.com/article/us-philippines-politics-marcos/philippines-duterte-to-allow-burial-of-marcos-at-heroes-cemetery-idUSKCN0YE1YY>
- Mogato, M. y R. Ng (2017), “Thousands Rally in Philippines, Warn of Duterte ‘Dictatorship’”, *Reuters*, 21 de septiembre. Recuperado de: <https://www.reuters.com/article/us-philippines-protest/thousands-rally-in-philippines-warn-of-duterte-dictatorship-idUSKCN1BW0YA>
- Mogato, M. (2018), “Philippines Seeks ‘Terrorist’ Tag for 600 Alleged Communist Guerrillas”, *Reuters*, 7 de marzo. Recuperado de: <https://www.reuters.com/article/us-philippines-rebels/philippines-seeks-terrorist-tag-for-600-alleged-communist-guerrillas-idUSKCN1GK0DO>
- Morallo, A. (2017), “Duterte Praises Marcos’ Martial Law as ‘Very Good’”, *Philstar Global*, 25 de mayo. Recuperado de: <https://www.philstar.com/headlines/2017/05/25/1703241/duterte-praises-marcos-martial-law-very-good>

- Ng, R. y M. Mogato, (2017), “Philippines Declares Battle with Islamist Rebels over in Marawi City”, *Reuters*, 23 de octubre. Recuperado de: <https://www.reuters.com/article/us-philippines-militants/philippines-declares-battle-with-islamist-rebels-over-in-marawi-city-idUSKBN1CS0F5>
- OCHOA (2018a), *Philippines: 2017 Key Displacements and Responses*. Recuperado de: <https://reliefweb.int/report/philippines/philippines-2017-key-displacements-and-responses>
- OCHOA (2018b), *Philippines: Super Typhoon Mangkhut (Ompong) Impact Analysis (14 Sep 2018 0500 PHT)*. Recuperado de: <https://reliefweb.int/report/philippines/philippines-super-typhoon-mangkhut-ompong-impact-analysis-14-sep-2018-0500pht>
- OCHOA (s.f.a), *Tropical Storm Kai-Tak –Dec 2017*. Recuperado de: <https://reliefweb.int/disaster/tc-2017-000180-phl>
- OCHOA (s.f.b), *Tropical Cyclone Tembin –Dec 2017*. Recuperado de: <https://reliefweb.int/disaster/tc-2017-000182-phl>
- OCHOA (s.f.c), *Typhoon Mangkhut –Sep 2018*. Recuperado de: <https://reliefweb.int/disaster/tc-2018-000149-phl>
- Olea, R. V. (2018a), “Church says Killing of Tuguegarao Priest an ‘Evil Act’”, *Bulatlat*, 30 de abril. Recuperado de: <http://bulatlat.com/main/2018/04/30/church-says-killing-tuguegarao-priest-evil-act/>
- Olea, R. V. (2018b), “3rd Priest Killed Under Duterte”, *Bulatlat*, 11 de junio. Recuperado de: <http://bulatlat.com/main/2018/06/11/3rd-priest-killed-duterte/>
- Petty, M. (2018), “Hague Court opens Examination into Philippines Drugs War Deaths”, *Reuters*, 8 de febrero. Recuperado de: <https://www.reuters.com/article/us-philippines-drugs-icct/hague-court-opens-examination-into-philippines-drugs-war-deaths-idUSKBN1FS0KU>
- Philippine Statistics Authority (2017), “Family Income and Expenditure Survey (FIES)”, Recuperado de: <https://psa.gov.ph/sites/default/files/FIES%202015%20Final%20Report.pdf>

- Philippine Statistics Authority (2018), Annual Poverty Indicators Survey 2017: Final Report. Recuperado de: <https://psa.gov.ph/sites/default/files/2017%20APIS%20FINAL%20REPORT.pdf>
- Philstar Global (2018b), “Full Text: Duterte’s 2018 SONA Speech”, *Philstar Global*, 23 de julio. Recuperado de: <https://www.philstar.com/headlines/2018/07/23/1836195/full-text-dutertes-2018-sona-speech>
- Placido, D. (2016), “Duterte: My Father Stood by Marcos”, *ABS-CBN News*, 4 de octubre. Recuperado de: <https://news.abs-cbn.com/news/10/04/16/duterte-my-father-stood-by-marcos>
- Ranada, P. (2017), “Duterte Warns He’ll Order Shooting of Human Rights Advocates”, *Rappler*, 16 de agosto. Recuperado de: <https://www.rappler.com/nation/178968-duterte-probe-shoot-human-rights-advocates>
- Rappler (2017), “Congress Extends Martial Law in Mindanao to End of 2018”, *Rappler*, 13 de diciembre. Recuperado de: <https://www.rappler.com/nation/191207-congress-mindanao-martial-law-extension-2018>
- Rappler (2018), “DOJ Clears Cebu Businessman Peter Lim of Drug Trade Charges”, *Rappler*, 12 de marzo. Recuperado de: <https://www.rappler.com/nation/197993-doj-clears-cebu-businessman-peter-lim-drug-trade-conspiracy>
- Rappler (2018a), “Full Text: Duterte’s Statement on Int’l Criminal Court Withdrawal”, *Rappler*, 14 de marzo. Recuperado de: <https://www.rappler.com/nation/198171-full-text-philippines-rodrigo-duterte-statement-international-criminal-court-withdrawal>
- Rappler (2018), “In Photos: Thousands Hold SONA 2018 Protests Around PH”, *Rappler*, 23 de julio. Recuperado de: <https://www.rappler.com/move-ph/208000-sona-2018-protests-philippines-photos>
- Rappler (2016), “The Duterte list: Judges, Mayors, Police Officials Linked to Drugs”, *Rappler*, 7 de agosto. Recuperado de: <https://www.rappler.com/nation/142210-duterte-list-lgu-police-officials-linked-drugs>
- Rappler (2017), “Thousands Join National Protest to Remind Filipinos of Marcos’ Martial Law”, *Rappler*, 21 de septiembre. Recuperado de:

<https://www.rappler.com/nation/182868-philippines-protest-rallies-martial-law-45th-anniversary>

Regencia, T. (2018a), “Senator: Rodrigo Duterte’s Drug War has Killed 20,000”, *Aljazeera*, 21 de febrero. Recuperado de: <https://www.aljazeera.com/news/2018/02/senator-rodrigo-duterte-drug-war-killed-20000-180221134139202.html>

Regencia, T. (2018b), “Philippine Catholic Priests: ‘They are Killing Us’”, *Aljazeera*, 13 de junio. Recuperado de: <https://www.aljazeera.com/news/2018/06/philippine-catholic-priests-killing-180613073921062.html>

Reuters (2018), Dela Cruz, E. y T. Sterling, “Philippines Informs U.N. of ICC Withdrawal, Court Regrets Move”, *Reuters*, 16 de marzo. Recuperado de: <https://www.reuters.com/article/us-philippines-duterte-icc-un/philippines-informs-u-n-of-icc-withdrawal-court-regrets-move-idUSKCN1GS0Y5>

Rivas, R. (2018a), “Philippines Revises Q1 2018 GDP Down to 6.6%”, *Rappler*, 8 de agosto. Recuperado de: <https://www.rappler.com/business/209144-revised-gross-domestic-product-philippines-q1-2018>

Rivas, R. (2018b), “Philippine Economy Slows Down to 6% in Q2 2018”, *Rappler*, 9 de agosto. Recuperado de: <https://www.rappler.com/business/209165-gross-domestic-product-philippines-q2-2018>

Romero, A. (2018), “Terrorist Tag on CPP-NPA to Stay”, *Philstar Global*, 30 de abril. Recuperado de: <https://www.philstar.com/headlines/2018/04/30/1810707/terrorist-tag-cpp-npa-stay>

Roughneen, S. y N. Smith (2018), “Duterte Goes to War with UN as he Threatens to Throw Rights Team to the Crocodiles”, *The Telegraph*, 12 de marzo. Recuperado de: <https://www.telegraph.co.uk/news/2018/03/12/duterte-goes-war-un-threatens-throw-rights-team-crocodiles/>

Social Weather Stations (2018a), *June 27-30, 2018 Social Weather Survey: Satisfaction with National Admin’s campaign against Illegal Drugs at Net +65*, 23 de septiembre. Recuperado de: <https://www.sws.org.ph/swsmain/artcldisppage/?artcsyscode=ART-20180923090232>

- Social Weather Stations (2018b), Second Quarter 2018 Social Weather Survey: Three in five Pinoys say the Arrest of Idlers (“Tambay”) by Police is a Violation of Human Rights, 23 de septiembre. Recuperado de: <https://www.sws.org.ph/swsmain/artcldisppage/?artcsyscode=ART-20180923093408>
- Social Weather Stations (2018c), Second Quarter 2018 Social Weather Survey: 26% of Pinoys do not Believe Police Claims of “Nanlaban”, 27% Believe, and 47% are Undecided, 25 de septiembre. Recuperado de: <https://www.sws.org.ph/swsmain/artcldisppage/?artcsyscode=ART-20180925201846>
- Social Weather Stations (2018d), *Fourth Quarter 2017 Social Weather Survey: Net Satisfaction Rating of the Duterte National Administration Rises to Record-High “Excellent” +70*, 17 de enero. Recuperado de: <https://www.sws.org.ph/swsmain/artcldisppage/?artcsyscode=ART-20180117160545>
- Social Weather Stations (2018e), Third Quarter 2018 Social Weather Survey: 84% are Satisfied with the Way Democracy Works; 59% Always Prefer Democracy to Any Other Kind of Government, 4 de octubre. Recuperado de: <https://www.sws.org.ph/swsmain/artcldisppage/?artcsyscode=ART-20181004232016>
- Social Weather Stations (2018f), *Third Quarter 2018 Social Weather Survey: Net Satisfaction Rating of the National Administration a “Very Good” +50*, 5 de octubre. Recuperado de: <https://www.sws.org.ph/swsmain/artcldisppage/?artcsyscode=ART-20181005230110>
- Staff & Agencies (2018), “Typhoon Mangkhut: Millions Braced in Philippines for Giant Storm”, *The Guardian*, 14 de septiembre. Recuperado de: <https://www.theguardian.com/world/2018/sep/13/typhoon-mangkhut-storm-and-monsoon-philippines>
- South China Morning Post (2018), “Philippine President Rodrigo Duterte Hit with New ICC Complaint about Extrajudicial Killings”, *South China Morning Post*, 28 de Agosto. Recuperado de: <https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/2161639/philippine-president-rodrigo-duterte-hit-new-icc-complaint>

- Taguba Yecyec, J. (2018), “Gov’t to Build P400-Million Military Camp in Marawi”, *ABS-CBN News*, 30 de enero. Recuperado de: <https://news.abs-cbn.com/news/01/30/18/govt-to-build-p400-million-military-camp-in-marawi>
- Talabong, R. (2018), “A Prayer Interrupted: What we Know so Far in Father Nilo’s Killing”, *Rappler*, 2 de julio. Recuperado de: <https://www.rappler.com/newsbreak/iq/206283-information-about-richmond-nilo-killing>
- Torres-Tupas, T. (2018), “Declare CPP-NPA as Terrorist Group, Gov’t Asks Court”, *Inquirer.net*, 21 de febrero. Recuperado de: <https://newsinfo.inquirer.net/970287/breaking-declare-cpp-npa-as-terrorist-group-govt-asks-court>
- Trige Andersen, N. (2018), “The Battle of Marawi is not Over”, *The Diplomat*, 17 de febrero. Recuperado de: <https://thediplomat.com/2018/02/the-battle-of-marawi-is-not-over/>
- Villamor, F. & Paddock, R. C. (2016), “Philippine Mayor Accused of Drug Links by Duterte is Killed by Police”, *The New York Times*, 28 de octubre. Recuperado de: <https://www.nytimes.com/2016/10/29/world/asia/philippines-duterte-mayor-police.html?module=inline>
- Villamor, F. (2016), “Another Philippine Mayor Accused of Drug Crimes by Duterte is Killed”, *The New York Times*, 5 de noviembre. Recuperado de: <https://www.nytimes.com/2016/11/06/world/asia/philippines-mayor-rolando-espinoza-drugs-duterte.html?module=inline>
- Wakefield, F. (2017), “Combat Operations in Marawi Terminated”, *Manila Bulletin*, 23 de octubre. Recuperado de: <https://news.mb.com.ph/2017/10/23/combat-operations-in-marawi-terminated/>